

REPÚBLICA DE COLOMBIA



RAMA JUDICIAL

TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN

Medellín, diecisiete (17) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

La Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, integrada por los Magistrados CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES (ponente), VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO y SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE, procede a emitir pronunciamiento en lo que corresponde al proceso ordinario laboral promovido por CONSUELO GIRALDO MONTES contra la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES- (Radicado 05001-31-05-016-2020-00252-01).

Se RECONOCE PERSONERIA para actuar a favor de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES -COLPENSIONES-, a la abogada Mayrena Martínez González, con tarjeta profesional No. 331.069 del C.S. de la J., conforme al poder que le fue conferido.

Ahora bien, sería del caso entrar a analizar la sentencia venida en apelación de no ser porque se advierte una causal de nulidad, concretamente una falta de competencia por corresponder el asunto a la jurisdicción contenciosa administrativa conforme pasa a exponerse:

1. La demandante pretende la reliquidación de su prestación económica por vejez teniendo en cuenta la totalidad del tiempo laborado al servicio de la ESE Metrosalud, incrementándose la tasa de reemplazo aplicada.

En respaldo a sus aspiraciones narró que trabajó para la ESE Metrosalud durante 35 años y 8 meses en forma continua e ininterrumpida, alcanzando un número de semanas superior a las 1.800. Que por sentencia judicial quedó afiliado a Colpensiones como administradora del régimen de prima media, entidad que por acto administrativo SUB 125668 de 2019 reconoció la pensión de vejez contando con 1.545 semanas, aplicando sobre un IBL de \$2.220.410 una tasa de reemplazo del 70.17%, dejando de lado más de 500 semanas con las que obtendría un incremento en la prestación.

Colpensiones al dar respuesta al libelo presentó oposición a las pretensiones por cuanto mediante la Resolución SUB 308950 del 12 de noviembre de 2019 ya fue reliquidada la pensión con base en 1.586 semanas a partir de lo que establece el artículo 10 de la Ley 797 de 2003. Como excepciones de mérito formuló las siguientes: inexistencia de reconocer y pagar reliquidación de la pensión de vejez, inexistencia de la obligación de pagar intereses moratorios, improcedencia de la indexación, compensación, prescripción, buena fe, imposibilidad de condena en costas y descuentos del retroactivo por salud.

En sentencia del 07 de diciembre de 2022, el Juzgado Dieciséis Laboral del Circuito de Medellín, NEGÓ la totalidad de las pretensiones declarando probada la excepción de inexistencia de la obligación. CONDENÓ en costas a la demandante, fijando las agencias en derecho en la suma de \$1.000.000.

Como argumentos de la decisión, en síntesis, sostuvo que, conforme a la prueba recaudada, no se contaba con la información entregada por el empleador donde se de cuenta de la labor desplegada por la demandante por los períodos que se aduce fueron omitidos en la historia laboral, a partir de la cual, en efecto, se procedió en el estudio y posterior cálculo de la prestación, sin que fuera posible a su juicio, partir de suposiciones y conjeturas para emitir condena.

El apoderado judicial del demandante se distanció de lo decidido, argumentando que se está violando el principio de imparcialidad, ya que legal y jurídicamente se demostró que trabajó de forma continua e ininterrumpida por más de 35 años, cuyos soportes y pagos al sistema de seguridad social

aparecen acreditados, señalando que en el asunto no fue analizada toda la prueba en su contexto, aportándose un sinnúmero de peticiones y respuestas que dan cuenta de ese hecho, dándose satisfacción a la carga probatoria que le asistía. Alude a la violación del principio de favorabilidad e inmediación de la prueba.

2. En análisis de lo debatido, se encuentra esta Sala de Decisión de la prueba documental recaudada que la señora MARIA CONSUELO GIRALDO MONTES ostentaba la calidad de empleada pública del nivel municipal al momento de retirarse del sistema de pensiones, pues así lo dejan ver las múltiples historias laborales arrimadas al proceso (Pág. 9-154 Archivo 16), y los certificados de información laboral incluidos en su expediente administrativo (Págs. 188-201 Archivo 16), que evidencian que su desarrollo productivo se ejecutó primero en el Municipio de Medellín como “secretaria cuarta” del 24 de agosto de 1983 al 31 de diciembre de 1990, y en la ESE Metrosalud en el cargo de “secretaria” del 01 de enero de 1991 al 02 de junio de 2019; además de la Resolución N° 3097 del 30 de mayo de 2019 (Pág. 124 y 162 Archivo 16), a través de la cual se dio por aceptada la renuncia de la servidora a partir del 04 de junio de 2019 en su calidad de Secretaria, cargo desempeñado que denota su naturaleza dentro del ente municipal, pues como es sabido los servidores de las Empresas Sociales del Estado por regla general son empleados públicos, salvo que desempeñen labores relacionadas con el mantenimiento de la planta física hospitalaria o de servicios generales, y claramente su oficio no encuadra ni hace parte del mantenimiento de la planta física hospitalaria o de servicios generales, pues ello comprende el conjunto de actividades orientadas a mejorar, conservar, adicionar o restaurar la planta física de los entes hospitalarios destinados al servicio público esencial de salud, tales como electricidad, carpintería, mecánica, jardinería, pintura, albañilería, vigilancia o celaduría, lo que no ubica a la demandante en la condición de trabajadora oficial, lo que coincide con lo dispuesto en el artículo 17 del Decreto 1876 de 1994 y el parágrafo del artículo 674 del decreto 1298 de igual año que definen las pautas que deben tenerse en cuenta para determinar si las personas que prestan sus servicios son empleados públicos o excepcionalmente trabajadores oficiales y se acompasa con el contenido del parágrafo del artículo 26 de la Ley 10 de 1990, que regula la clasificación de

los trabajadores oficiales del sector de la Salud y se acompasa con lo que la H. Corte Suprema ha acogido al respecto (Ver entre otras SL18413-2017, SL419-2022, SL807-2023, SL1837-2023).

En esa línea de pensamiento, el caso de la actora su relación con la ESE empleadora estaba atada a las disposiciones reglamentarias y como quiera que sus actividades claramente no guardan ninguna relación con las catalogadas para los trabajadores oficiales, no tiene competencia la jurisdicción de lo laboral para definir el asunto de seguridad puesto en discusión por esta empleada pública.

Y es que la jurisdicción Ordinaria Laboral, conforme lo reglamenta el artículo 2 del C.P. del T. y de la S.S., conoce de asuntos de seguridad social en los términos del ordinal 4, modificado por el art. 622 de la Ley 1564 de 2012, es decir, de *“Las controversias relativas a la prestación de los servicios de la seguridad social que se susciten entre los afiliados, beneficiarios o usuarios, los empleadores y las entidades administradoras o prestadoras, salvo los de responsabilidad médica y los relacionados con contratos”*.

Ya el artículo 104 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, dispone que la jurisdicción contencioso administrativa conoce de asuntos de la seguridad social, en los casos *“...relativos a la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado, y la seguridad social de los mismos, cuando dicho régimen esté administrado por una persona de derecho público”*.

En este caso, la demandada es la Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones- quien es una persona de derecho público, tal cual lo dispone el artículo 1° del Decreto 4121 de 2011.

Atendiendo lo precedente, y a que las normas especiales priman sobre las generales, a más que la acción judicial se promovió el 02 de septiembre de 2020 (Archivo 002), esto es luego de la entrada en vigencia de la mencionada Ley 1437, ocurrida a partir del 2 de julio de 2012 -*artículo 308*-; se concluye que para asumir el conocimiento de lo pedido en esta oportunidad, por tratarse

de un asunto de la seguridad social de una empleada pública ante una administradora con igual naturaleza, la jurisdicción y competencia recae es en la especialidad Contenciosa administrativa.

3. Siendo ello así, en los términos del numeral 1° del artículo 133 del Código General del Proceso, esta actuación debe anularse, como en efecto se hará, pero con los alcances en lo establecido en el artículo 138 ibídem, norma que dispone:

“Cuando se declare la falta de jurisdicción, o la falta de competencia por el factor funcional o subjetivo, lo actuado conservará su validez y el proceso se enviará de inmediato al juez competente; pero si se hubiere dictado sentencia, esta se invalidará.

La nulidad solo comprenderá la actuación posterior al motivo que la produjo y que resulte afectada por este. Sin embargo, la prueba practicada dentro de dicha actuación conservará su validez y tendrá eficacia respecto de quienes tuvieron oportunidad de controvertirla, y se mantendrán las medidas cautelares practicadas.

El auto que declare una nulidad indicará la actuación que debe renovarse”.

En virtud de lo dicho, habrá lugar a decretar la nulidad de lo actuado a partir del 07 de diciembre de 2022 cuanto se profirió decisión de fondo, conservándose las probanzas recogidas conforme a la norma enunciada, debiendo remitirse las actuaciones a los Juzgados Administrativos de esta ciudad para que se rehaga la actuación dejada sin efectos.

DECISIÓN:


En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Quinta de Decisión Laboral, **ANULA** lo actuado dentro del proceso ordinario laboral instaurado por MARIA CONSUELO GIRALDO MONTES en contra de COLPENSIONES, a partir del 07 de diciembre de 2022, inclusive, cuando se emitió la sentencia por el Juzgado Dieciséis Laboral del Circuito de Medellín,


inclusive, por las razones que da cuenta la parte motiva de esta decisión, conservando validez lo actuado y la prueba recaudada.


Por la Secretaría de la Sala, remítase la actuación a la Oficina de Reparto de los Juzgados Administrativos de esta ciudad, e infórmese de lo decidido al Juzgado Dieciséis Laboral del Circuito de Medellín.

La anterior decisión se notifica en ESTADOS ELECTRÓNICOS.

Los Magistrados,


CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES


VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO


SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE

Se certifica: Que la anterior providencia fue notificada por ESTADOS N° 177 fijados el 18 de octubre de 2023 En la página web de la rama judicial a las 8 a.m.

El secretario